

SOLICITADA

Por la importancia de su contenido, he solicitado la publicación del siguiente texto.

Carlos Toro

PERIODO
PRESIDENCIAL
008717
ARCHIVO

SOBRE EL PLEBISCITO

Por Luis Corvalán

No es del todo seguro, pero sí es lo más probable que se imponga el plebiscito. De efectuarse éste, ¿qué posibilidades ofrece para propinarle una derrota política a Pinochet y favorecer con ello el término de la dictadura?

Una respuesta a este interrogante la adelantamos en nuestra declaración de febrero. Dijimos entonces: "La derrota de la tiranía sólo puede y debe lograrse a través de una intensa movilización de masas. Si el plebiscito se realiza en medio de una decidida lucha contra el régimen en todos los frentes y en los más diversos terrenos, podría transformarse en una coyuntura favorable al pueblo. El PC llama desde hoy a organizar estas luchas, a respaldar los movimientos sociales en perspectiva para el mes de marzo, a crear las condiciones para que el plebiscito, cualquiera sea su resultado, pueda ser detonante de un levantamiento popular que conduzca al derribamiento de la tiranía".

Alguna gente se empeña en desfigurar nuestra política, presentándonos como si hubiésemos adoptado una posición definitiva en el sentido de no participar en el plebiscito y de hacerle la guerra a los que ya se han pronunciado por el NO. Decididamente esto no es así. Lo cierto es que hemos sostenido y sostenemos que mejor habría sido y es todavía que toda la oposición rechace el plebiscito y exija —hasta conseguir las— elecciones libres y competitivas, y no nos hemos sumado a quienes han resuelto embarcarse en el plebiscito con la bandera del NO porque, como además dijimos en la precitada declaración de febrero, "la lucha es y debe ser el generador principal del cambio que se requiere". "Con este criterio", agregamos entonces, "esforzándonos porque los acontecimientos tomen el rumbo de la confrontación con la tiranía, los comunistas tomamos e iremos tomando, frente a cada situación concreta, incluido el plebiscito, las decisiones más favorables a los intereses del pueblo".

En las condiciones que se dan en estos momentos, el plebiscito surge como un gran fraude, que arranca de la propia Constitución al establecer ésta, en su artículo octavo, la proscripción de partidos políticos representativos de una parte considerable del pueblo. El fraude está en marcha. Es una gigantesca operación que incluye el uso y abuso de recursos públicos, sobornos, ofertas, presiones y amenazas, la descarada intervención de las autoridades, la utilización escandalosa de todo el aparato del Estado, la transformación de los municipios en activas secretarías políticas al servicio del oficialismo, la participación abierta de altos oficiales del Ejército en favor de Pinochet, los allanamientos, las detenciones, los secuestros y



otras formas de represión política.

Lo concreto es que la dictadura sigue imponiendo sus reglas. En los primeros días de marzo renovó el estado de emergencia y el estado de peligro de perturbación de la paz interior, que le permiten prohibir las reuniones públicas y detener, incomunicar, relegar y exiliar ciudadanos a su entera voluntad. En Santiago, Valparaíso y otras ciudades reprimió brutalmente las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Mantiene centenares de presos políticos, periodistas sometidos a proceso o condenados a prisión. Permanece encarcelado el secretario general del Partido Socialista y presidente de la Izquierda Unida, Clodomiro Almeyda. Continúa el exilio. El más importante medio de comunicación de masas, la televisión, sigue bajo el control de la dictadura. No sólo el canal estatal, sino también los canales universitarios, son activos y cotidianos propagandistas del dictador, cuyos movimientos y giras electorales cubren profusamente. Hoy por hoy no existen condiciones para que se pueda reflejar en las urnas la voluntad popular ni menos para que sea respetada en un hipotético triunfo del NO.

El voto que se emita en la cámara secreta no será un voto libremente expresado en el caso de cientos de miles de personas que se hallan bajo la directa presión de todo un sistema

de coacción montado ex profeso por la dictadura. Hay muchos que temen que su voto esté ya controlado o que se lo controlen el día del plebiscito. Y habrá un gran número de chilenos que son contrarios a la tiranía y que no podrán votar por no haberse inscrito, principalmente a causa del gasto que impone sacar nuevo carnet.

Un sector de la oposición de centroderecha también quiere confundir al pueblo, tratando de colocar como lo central de hoy la cuestión de pronunciarse por el NO en un plebiscito al que todavía ni siquiera se ha convocado y en relación al cual se pueden considerar varias tomas de posición, no sólo participar en él, sino descalificarlo y promover la abstención o el boicot. Para nosotros lo central y lo primero es la unidad y la lucha de todas las fuerzas democráticas, terminar con la dictadura ahora. En cambio, la Democracia Cristiana y una parte de sus aliados se oponen a la lucha abierta contra la dictadura y a la acción conjunta de toda la oposición, le temen al pueblo cuando éste se transforma en el protagonista principal, rechazan de hecho la movilización social o la limitan a una campaña por el NO de carácter meramente electoral. Tal postura no garantiza una victoria democrática y conlleva el peligro de que siga prolongándose la dictadura de Pinochet. Esta es la cuestión.

Los trece partidos que resolvieron concertarse en torno al NO advirtieron que oportunamente descalificarían el plebiscito si "el proceso electoral no estuviese revestido de condiciones mínimas suficientes de limpieza". La Democracia Cristiana y algunos otros de esos partidos se disponen a dejar dicha advertencia en el papel, a no hacer cuestión de ninguna de las condiciones que plantearon, ni del número de inscritos en los registros electorales, ni del ejercicio sin trabas de las libertades públicas, ni del acceso equitativo a los medios de comunicación y demás requisitos de que hablaron.

Nosotros instamos a todos los partidos de oposición a actuar con firmeza, a crear condiciones que cambien el cuadro político y lo hagan favorable a la causa democrática. Los invitamos a tomar en serio el problema de las garantías. Todas las fuerzas de oposición deben exigir las y luchar por obtenerlas. A los requisitos señalados el año pasado por el Episcopado Nacional y en febrero último por la concertación de los trece, se debe agregar el reconocimiento de los mismos derechos para todos los partidos, el término inmediato del exilio, el ejercicio del derecho a voto para los chilenos que residen en el exterior y la libertad de Clodomiro Almeyda y de todos los presos políticos. El Comando contra el Fraude y por la Democracia, creado a iniciativa de la Izquierda Unida, debería jugar un papel más destacado en las denuncias propias a su misión.

En especial, llamamos a los trabajadores y al pueblo a desarrollar al máximo la lucha por sus propias demandas y por la libertad.

Nunca los cambios políticos de trascendencia han dependido sólo del acto del sufragio, ni siquiera bajo los gobiernos más democráticos, y jamás ello podrá ocurrir bajo una dictadura como la que sufrimos. Las grandes jornadas electorales que presentaron o facilitaron un avance significativo en el camino del progreso político y social del país siempre estuvieron acompañadas de una gran movilización del pueblo. El desplazamiento de la derecha del gobierno y la llegada a él de la Democracia Cristiana y luego de la Unidad Popular, no fueron meros resultados de eventos electorales. El ascenso a posiciones de poder de nuevas fuerzas sociales y políticas, como resultado de las elecciones presidenciales de 1964 y 1970, fue ante todo producto de una lucha sostenida contra la oligarquía, por las reivindicaciones de los trabajadores, por los derechos del pueblo y se logró en un período de auge del movimiento obrero y popular, en los años del despertar campesino, de la lucha por la reforma agraria y por la nacionalización del cobre, del desarrollo pujante del movimiento estudiantil que impulsó la reforma universitaria. Por esto, reducirlo todo a la inscripción electoral y al NO en el plebiscito significa limitar el campo de la lucha, levantar un espejismo de victoria o a lo sumo trabajar por un triunfo que carecería de la fuerza necesaria para sacar de su puesto al dictador.

En Filipinas, en Haití y en todos los países donde se ha hecho a un lado a un déspota como Marcos o Duvalier ha sido necesario e indispensable una fuerte y permanente lucha popular y nacional.

Pinochet insiste en que, cualquiera sea la opinión que pudiera expresarse en el plebiscito, se cumplirá estrictamente lo que dice la Constitución impuesta hace ocho años atrás. De tan tozuda posición no lo saca nadie. Por su lado, en la hipótesis de que pudiera vencer el NO, tanto los partidos de izquierda como la DC y otras colectividades de centro sostienen que Pinochet no puede seguir un año más en el poder, ni permanecer intangible la Constitución del 80, ni aceptarse un parlamento parcialmente designado, ni la tutoría militar sobre el poder civil que pudiera emanar de la voluntad ciudadana. De este modo, el plebiscito aparece como una cierta confrontación con la dictadura. Pero el resultado de esta eventual confrontación no podrá depender fundamentalmente del sufragio. Pinochet pretende quedarse en el poder de todas maneras. No le cabe una idea distinta en la cabeza. La brutal declaración que hizo el jefe de gabinete de la Intendencia de Magallanes, Gerardo Álvarez, en el sentido de que serán pasados por las armas quienes, de producirse el triunfo del NO, no acepten el itinerario constitucional previsto para esta alternativa, corresponde al pensamiento fascista que prevalece en las altas esferas del régimen. El mismo Pinochet dijo en su discurso del 11 de marzo que el triunfo de quienes rechacen o disientan de la institucionalidad vigente, generaría un "conflicto de impredecibles y negativos efectos".

Las declaraciones de Matthei y Merino en cuanto a respetar, sea cual fuere, el resultado del plebiscito y a considerar que no sería el caos el triunfo del NO, expresan cierta diferencia con aquel pensamiento, pero no justifican en modo alguno el entusiasmo que han despertado en determinados políticos. Porque en esta eventualidad —la del triunfo del NO— el principal y gran problema sería el de abrir paso a la democracia, empezando por dar forma a un gobierno provisional y a una Asamblea o Congreso Nacional con poderes constituyentes, cuestiones que rechazan tanto Pinochet como Merino y Matthei. En tal situación, el plebiscito podría ser un hito importante en la lucha por la democracia, no sólo ni tanto por el triunfo del NO, sino ante todo por el resultado del conflicto que se plantearía entre los que apeándose a la Constitución del 80, desearían dejar las cosas tal como están y los que reclamarían proceder a cambiarlas de inmediato de acuerdo a la voluntad nacional.

Para el caso de que el plebiscito fuera adverso al dictador, los trece partidos que se concertaron en torno al NO se proponen "concordar con las fuerzas armadas los términos de una transición rápida y ordenada hacia la democracia". No vemos la posibilidad de que las instituciones militares acepten voluntariamente ningún acuerdo en tal sentido y, de aceptarlo alguna vez, lo harían con la idea fija de comprometer ante todo a las fuerzas democráticas a no escarbar en los graves atropellos a los derechos humanos cometidos en este período, cuestión que el pueblo jamás aceptará. No se trata de rechazar a priori la posibilidad de entendimiento con las fuerzas armadas, sino de comprender que un acuerdo realmente favorable a la democracia tiene que ser producto de la lucha del pueblo, impuesto por las circunstancias. En un momento dado, las masas populares tendrían que pasar al estado de insubordinación general, ganar las calles y copar con su presencia las grandes ciudades para que las fuerzas armadas, probablemente con otros jefes militares, pudieran cambiar de actitud. Ello podría ocurrir ante situaciones tales como el triunfo del NO o frente a la evidencia del fraude, siempre que la oposición y en primer lugar la izquierda, tengan permanentemente —y en particular en esas circunstancias— una actitud de pelea e impulsen sin vacilaciones la movilización social.

En el seno de la dictadura hay contradicciones. Unos están por el continuismo con Pinochet y otros sin él, como ha quedado en evidencia en las escandalosas rencillas públicas que acaba de protagonizar el Partido Renovación Nacional. Los fraudes que ha habido en la elección de sus dirigentes son vistos por la opinión pública como hechos ilustrativos del gran fraude que el régimen monta para manipular el plebiscito. Hay también alguna gente, incluso entre los militares, dispuesta a facilitar el camino a la democracia, y otra que se opone a ello por todos los medios. La lucha de masas y la acción ofensiva de la oposición deberían desplegarse de tal forma que constituyan un peligro para la estabilidad del régimen, ahondando esas contradicciones y transformándolas en un factor objetivo favorable a la causa democrática. De lo contrario, como ha sucedido

varias veces, Pinochet las podrá resolver a su favor. Lo que pasó con Matthei es harto aleccionador. El año pasado, pavoneándose de tener opiniones propias, declaró pomposamente que era partidario de someter al plebiscito el nombre de un civil. Hasta le fijó la edad: cincuenta y dos años. Recientemente ha confesado que ello no será posible. "A veces —expresó a los periodistas— uno tiene un ideal hermoso y después tiene que hacer las cosas que le corresponde políticamente". Está claro. Matthei ya se entregó. ¿Se puede acaso esperar algo distinto de Gordon, que hace lo que le ordena su jefe, o de Merino y Stange, que tienen también de vez en cuando opiniones propias y que, en definitiva, lo único que quieren es la continuidad de la dictadura y no contrariar al dictador?

Sólo una lucha multiforme del pueblo, sólo una intensa, combativa, creciente y multitudinaria movilización social que llegue y pase más allá del plebiscito, puede y debe generar la ruptura que se necesita. Tarde o temprano ésta es inevitable. Y lo más probable es que adopte una forma de sublevación nacional.

La Constitución vigente hasta el 11 de septiembre de 1973 contemplaba la alternancia en el gobierno e incluso resortes para destituir al Presidente de la República antes de expirar su mandato. La coalición reaccionaria, la CODE, que se formó entonces con una destacada participación de la Democracia Cristiana, no tuvo la suficiente fuerza social, ni conquistó en las elecciones de marzo de 1973 el número de parlamentarios a que aspiraba para consumar un golpe institucional. En esas condiciones, la reacción chilena, coludida con el imperialismo norteamericano, recurrió al sangriento *putch* fascista y llevó a las fuerzas armadas a una guerra contra el pueblo que no acabará hasta que termine la dictadura. El paso desde el régimen democrático a la dictadura representó pues, una clara y abierta ruptura institucional. Ahora, el tránsito a la democracia no puede sino representar otra ruptura, esta vez justificada y necesaria. La Constitución del 80 es irreformable sin el acuerdo de Pinochet y éste no lo ha dado ni lo dará jamás. Por otra parte, ella permite que un solo hombre pueda estar 24 años en el mando presidencial y establece el suprapoder permanente de las fuerzas armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional. De hecho hace ilusoria la alternancia. En los marcos de la institucionalidad pinochetista no es posible, entonces, el tránsito a la democracia.

En el verano recién pasado y después de él han tenido lugar importantes movilizaciones. Destacan, entre ellas, los paros y huelgas de los trabajadores temporeros, la lucha de los obreros del PIMO, las elecciones sindicales en el carbón, la campaña de los profesores contra los despidos, las protestas contra la municipalización de los policlínicos, las tomas de terrenos en varias ciudades, los apagones y otras acciones paramilitares, la emocionante cadena de ayuno por la vida de los cinco desaparecidos de septiembre último, las manifestaciones realizadas del norte a sur del país el día 8 de marzo. Por otro lado, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, de los presos políticos, de los retornados y exiliados y el Movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, continúan su heroica y tenaz lucha por los derechos humanos. Los académicos y estudiantes de las universidades vuelven a la pelea. Los de la Chile se proponen reimpulsar el movimiento que aventó a Federici y culminar con nuevos éxitos la lucha por la defensa de su casa de estudios. Frente al alza del costo de la vida y al deterioro del poder adquisitivo de salarios, sueldos, jubilaciones y montepíos, se movilizan los trabajadores activos y pasivos y se aprestan a dar sus propias batallas por el aumento de sus ingresos. El Comando Nacional de Trabajadores ha levantado un nuevo pliego de peticiones y tiene en perspectiva otra huelga general. Se desarrolla la lucha por la democratización de las juntas de vecinos. Es sostenida la campaña de los periodistas por la libertad de prensa y la del director de *Análisis*, Juan Pablo Cárdenas y contra los procesos y condenas arbitrarios y, del mismo modo, la acción de los hombres y mujeres del arte y de las letras contra los amedrentamientos de que son objeto por parte de las bandas terroristas del régimen. La voz de la Iglesia Católica, en cuyo seno sobresalen valerosos obispos, sacerdotes, religiosos y la fecunda acción de las comunidades cristianas, se sigue haciendo oír en contra de las demasías y abusos de la dictadura y en favor de los intereses e ideales co-

munes a la ciudadanía. Vemos la posibilidad de un cambio ante todo en el desarrollo vigoroso de este movimiento social multifacético. Nuestra fundamental preocupación es seguir impulsándolo.

Nosotros aspiramos a un régimen democrático avanzado, pero no ponemos esto en primer plano. Lo que más importa hoy es terminar con la dictadura, acabar con ella pronto, aprovechar la coyuntura del plebiscito para provocar su desmoronamiento. Si lo que se abre camino resulta ser una salida de tipo democrático burgués la consideraremos como un paso en la lucha por la democracia. Pero decimos con toda convicción que sin lucha, sin la acción coordinada o convergente de todas las fuerzas antidictatoriales, no habrá ninguna salida, ni siquiera una salida moderada. Impulsar esta lucha y promover esta acción, partiendo de las posiciones que tiene cada actor político y social, son dos cuestiones claves que deben resolverse en corto plazo.

En conclusión, en torno al plebiscito hay distintas visiones en el campo opositor. Algunos han resuelto participar en el en busca de lo que llaman una solución civilizada, o sea sin que el pueblo se subleve, sin que se encrespen demasiado las aguas de la lucha social. Otros lo han hecho en nombre de un realismo que no es tal, creyendo que la situación no da para más y que la lucha del pueblo no la puede modificar a su favor. Nosotros no compartimos estas visiones, aunque distinguimos, por cierto, las diversas posiciones entre los que se pronuncian por votar NO y, en especial, a quienes le confieren al NO un carácter rupturista. No hemos adoptado ni adoptaremos ninguna posición que signifique favorecer el camino de la conciliación, ni reconocerle al plebiscito rasgos democráticos que no tiene, ni mucho menos pensar que en él se decide todo. Y si en definitiva es convocado, nos emplearemos a fondo a fin de que las más diversas formas de lucha, incluidas las relativas al acto plebiscitario, se fusionen en un solo movimiento, en una formidable y decidida movilización política y social con miras al gran objetivo de terminar con la dictadura y aventar al dictador.

No ocultamos nuestra preocupación por la Izquierda Unida. La Democracia Cristiana venía trabajando, pública y privadamente por llevar agua a su molino, por una salida sin participación de los comunistas, por una salida moderada, conciliadora, con el amén del Departamento de Estado norteamericano. Tenemos claro que los partidos de la Izquierda Unida que se han concertado con la oposición de centro, no han buscado hacerle el juego a la DC y al Departamento de Estado. Pero el hecho objetivo es que han asumido una posición sin haberse agotado ni muchos menos la discusión en el seno de la coalición que formamos en común. Ello ha traído consecuencias negativas. Por ahora la IU se ha debilitado como conglomerado opositor. Aparece hoy con menos fuerza para influir en el desarrollo de los acontecimientos. La crisis que la ha afectado repercute en las organizaciones de masas, en cuyo seno hay quienes tratan de marcar una diferencia tajante entre los comunistas, el Partido Socialista Histórico y el MIR, y los que se han pronunciado por el NO. Esto no ayuda, por decir lo menos, a la movilización social.

Seguros de interpretar los anhelos e intereses del pueblo, seguiremos empeñados en fortalecer y desarrollar la Izquierda Unida porque es la mejor alternativa de poder. Haremos cuanto nos sea posible para restablecer en la lucha las mejores relaciones y la plena confianza entre todos sus integrantes. Por sobre los ataques que ha sufrido y los males que de cuando en cuando la han afectado, la izquierda ha sido y es una realidad indestructible, la expresión del pensamiento más avanzado del pueblo chileno. Como la fuerza democrática más consecuente tiene mucho que hacer en la lucha por una democracia verdadera, por la total erradicación de la doctrina de la seguridad nacional, por los cambios profundos que se precisan en la estructura del Estado, en la economía, en la distribución de los ingresos, en la educación, la salud y en todas las esferas. En el pasado la izquierda fue gobierno; en el futuro está llamada a asumir todavía mayores responsabilidades de poder. La izquierda chilena tendrá que empinarse sobre los obstáculos para asumir sus responsabilidades como tal y hacer que el país retome la senda de la revolución democrática, antiimperialista y antioligárquica, por la cual el pueblo caminó durante el gobierno de Salvador Allende, teniendo como meta el socialismo. ●

Reajustes salariales

El plebiscito pone la fecha

A medida que pasan los días cunde el nerviosismo entre los arquitectos del régimen que tienen a cargo el diseño del ambiente económico para enfrentar el plebiscito. Para el equipo que encabeza el ministro de Hacienda, Hernán Büchi, no está resultando muy fácil la tarea de mejorar los índices de calidad de vida que afectan directamente a los chilenos y que, se supone, son los que incidirán poderosamente en los amplios grupos de indecisos que consignan las encuestas.

La semana pasada las riendas volvieron a ceder, sin que el equipo económico se lo hubiese propuesto. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se disparó de 0,4 por ciento en febrero a 1,9 por ciento en marzo, y el desempleo subió en seis décimas, llegando a 8,3 por ciento en el trimestre móvil diciembre 1987-febrero 1988. La nota distinta la puso el leve aumento del Índice de Remuneraciones (IR) en 0,7 por ciento en febrero, respecto del mes anterior.

Las autoridades económicas están lo suficientemente advertidas de la importancia que tienen los niveles de ingresos y la capacidad de consumo de la población en la coyuntura política que se aproxima. El mismo día en que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras de inflación, remuneraciones y desempleo —el martes 5—, el gobierno entregó a la publicidad los resultados de un sondeo especial de la Gallup-Chile sobre problemas económicos. Fue la confirmación del desafío del régimen de destinar sus más caros esfuerzos a la solución —o por lo menos al alivio— de éstos en el plazo que antecede al plebiscito.

Los resultados obtenidos por la Gallup no son nuevos en este plano. Hace un par de años la Flasco (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) detectó —para sorpresa de muchos— que los chilenos se sienten mayoritariamente más afligidos por los problemas económicos que por la falta de libertades políticas. Esta vez Gallup constató que “más del 60 por ciento de los hogares chilenos manifiesta que sus ingresos actuales son regulares o malos o inadecuados para satisfacer sus requerimientos básicos”.

La caída de los ingresos, especialmente en los sectores más pobres (ver cuadro) ha sido alarmante para los afectados. Pero, curiosamente, recién comenzó a serlo para el equipo económico. Es más: la estrategia oficial había contemplado deliberadamente la contención de los ingresos y del consumo, como requisito indispensable para ajustar el gasto a las restricciones impuestas por los acreedores



Poder adquisitivo: el deterioro persiste desde 1981.

externos.

Este año las cosas cambiaron: el desafío político de congraciarse con los potenciales votantes es el nuevo acicate. A todo esto, hay algunos convencidos de que, al cabo de cuatro años de recuperación y aumento sostenido del producto geográfico bruto (PGB), ya es hora de distribuir beneficios. El mismo Büchi abandonó su vieja prédica de “crecimiento con austeridad en el consumo” y comenzó a hablar este año de “legítimas aspiracio-

nes de aumentos en el consumo y en las remuneraciones”.

RIESGO INFLACIONARIO

Basándose en cifras del INE, es posible advertir que las remuneraciones reales están hoy día en catorce por ciento por debajo del nivel que tenían en 1981. Ello, no obstante que el PGB —vale decir, la riqueza global del país— es superior en un cuatro por ciento al registrado ese año. La pregunta que